

Santiago, veintinueve de marzo dos mil veintidós.

**VISTOS Y OIDOS.**

Se interpone demanda de cobro de prestaciones por parte de **ANA MARÍA ULLOA MARTÍNEZ**, cedula nacional de identidad 8.953.424-0, que comparece a juicio representada por el abogado Jorge Guerrero Soto; en contra del **SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS**, RUT N°65.154.021-6, que comparece a juicio representado por la abogada Andrea Cárdenas Yadrijevic y el abogado Alejandro Alvarez Fraile.

Señala que demanda que la actora el 29 de febrero de 2016 asume el cargo de Directora del Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear de la comuna de Pudahuel, tras ganar concurso público.

Sostiene que en las bases del referido concurso se estableció como parte de las remuneraciones y de manera adicional a las asignaciones legales, una asignación convencional de un 70% de la renta básica mínima nacional docente. Esta asignación se pagó ininterrumpidamente desde el momento que asumió el cargo. Agrega que con fecha 01 de marzo de 2018, con la entrada en vigencia de la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, es traspasada a la demandada, Servicio Local de Educación Barrancas.

Afirma que desde su traspaso, la demandada nunca le pagó la asignación convencional de responsabilidad directiva equivalente al 70% de la renta básica mínima nacional



XTLTYRGPLS

docente. Explica que sus dos empleadores, tanto la Corporación Municipal de Pudahuel como el Servicio Local de Educación Pública Barrancas cometieron errores en el pago de sus remuneraciones, lo que produjo una confusión. Así, la Corporación Municipal de Pudahuel nunca le pagó la asignación directiva por alta concentración de alumnos prioritarios, prescrita en el inciso final del artículo 51 de la ley N°19.070, que en razones de la matrícula del establecimiento que dirigía correspondía a un 75% de la renta básica mínima nacional docente. Por su parte, el Servicio Local de Educación Pública Barrancas nunca le ha pagó la asignación convencional del 70% de la renta básica mínima nacional docente, pero sí le pagó la asignación directiva por alta concentración de alumnos prioritarios, en razón de la matrícula del establecimiento que dirigía.

Indica que su empleador nunca respondió su solicitud de pronunciamiento por esta irregularidad, por lo que presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República, quien señaló que el organismo competente para resolver era la Dirección del Trabajo. Refiere que este último organismo se pronunció a su favor.

Pide, en definitiva, se acoja la demanda y declarar que la asignación convencional del 70% de la renta básica docente es parte de las remuneraciones con que la demandante fue traspasada a la demandada; se condene a la demandada a pagar: \$3.948.156.- correspondiente al periodo marzo noviembre de 2018; \$5.431.848.- correspondiente al periodo diciembre de 2018 a noviembre de 2019; \$5.601.204.- correspondiente al periodo diciembre de 2019 a noviembre de 2020; \$1.438.113.- correspondiente al periodo diciembre de 2020 a febrero de 2021. Pide se declare también que la demandada debe incluir



ese pago en cualquier indemnización correspondiente al término de la relación laboral. Todo con intereses, reajustes y costas de la causa.

La demandada contesta la demanda señalando que la demandante fue traspasa a ese servicio el 01 de marzo de 2018, como señala la demanda.

Se opone una excepción de prescripción, asegurándose que se encuentran prescritas las prestaciones pretendidas entre marzo de 2018 y marzo de 2019, citándose al efecto el artículo 510 del Código del Trabajo.

Afirma que la asignación que se demanda en estos autos tiene un origen estatutario y no convencional. Indica que se deben tener presentes las normas transitorias de la Ley 21.040, que regulan los pasos previos al traspaso de la prestación del servicio educacional. Así, del literal a) del artículo vigésimo primero transitorio de la Ley se desprende que los funcionarios asociados a la prestación del servicio educacional traspasados a los Servicios Locales de Educación, lo hacen en la misma calidad y régimen remuneracional que detentaban con su antiguo empleador.

Sostiene que del análisis de las liquidaciones de remuneraciones entre el periodo de febrero de 2016 a febrero de 2018, se pagó a la demandante la asignación por concepto de alta concentración de alumnos prioritarios y la asignación adicional directiva por dicho concepto, la que ascendió a un 75%, en atención del nivel de matrícula del establecimiento. Indica que la asignación adicional por alta concentración de alumnos prioritarios se siguió pagando a la actora, por el empleador durante el año lectivo 2018 y 2019, en atención a que el establecimiento donde se desempeña como directora fue



calificado como aquellos de alta concentración de alumnos prioritarios. Así, en atención al número de estudiantes matriculados para el año lectivo 2020 y 2021, el establecimiento que dirige la demandante no calificó como aquellos de alta concentración de alumnos prioritarios, por lo que no continuó pagando esa asignación.

Agrega que de las liquidaciones de remuneraciones anteriores al traspaso a su Servicio se desprende claramente que, bajo el concepto de asignación adicional de responsabilidad directiva, percibía la asignación adicional directiva del artículo 51 de la Ley N°19.070.

Señala que la asignación que se reclama contraviene lo previsto en el artículo 47 de la Ley N° 19.070, por cuanto las mencionadas asignaciones deben siempre tener como fundamento el mérito, es decir, basarse en cualidades exigibles a los docentes, inherentes a su condición profesional o que se manifiesten en el ejercicio de sus funciones, en relación con las especiales dificultades u objetivos que se cumplan con estas, elementos que no concurren en la situación en análisis, pues el beneficio solicitado consistía en un monto fijo que se otorgaba a quien fuera designado en el concurso respectivo como director del establecimiento educacional que dirige, sin mayores exigencias, esto es, sin considerar los factores de mérito a que alude la señalada norma estatutaria. Afirma que debido a lo anterior, el Servicio Local de Educación Pública Barrancas, está impedido legalmente de pagar el presunto bono adicional de responsabilidad directiva voluntario.

Concluye afirmando que la asignación que se reclama nunca fue percibida por la demandante, lo que hace necesario



determinar la validez de dicha oferta a la luz del derecho administrativo y del estatuto jurídico especial aplicable a la actora.

Pide el rechazo de la demanda en todas sus partes.

En audiencia preparatoria se dio traslado de la excepción de prescripción a la demandante, resolviendo el Juez de esa audiencia acoger parcialmente la excepción, declarando prescrito el crédito por aquello anterior al 02 de abril de 2018.

#### **CONSIDERANDO.**

**PRIMERO:** Se ejerce acción de cobro de prestaciones, específicamente *asignación de responsabilidad directiva* equivalente al 70% de la renta básica mínima nacional docente que, según la demanda, desde el inicio de la relación laboral estaba percibiendo la actora, pero que la demandada habría dejado de pagar en marzo de 2018, cuando la demandante es traspasada de la Corporación Municipal de Pudahuel al Servicio Local de Educación Pública Barrancas, por disposición de la Ley 21.040. La demandada afirma que esa prestación, si bien se contiene en las bases del concurso para el cargo que ocupaba la demandante y, por tanto, se pactó, jamás fue pagada por no ser legalmente procedente, debiendo ajustar su actuar ese servicio, por ser un servicio público, únicamente a aquello que la ley autorice expresamente. Sostiene que lo que la demandante percibió fue la asignación por alta concentración de alumnos prioritario y la asignación adicional directiva por ese concepto, la que hasta el mes de marzo de 2018 se pagó equivocadamente en un 70% la renta básica mínima nacional docente, y, a partir de ese mes, se pagó en un 75%, lo que incrementó la remuneración



de la actora (esto último es señalado de manera tangencial en la contestación de la demanda, pero ahondado en el juicio y las observaciones a la prueba por la demandada). Luego, en el año 2019 dejó de ser pagada por no cumplirse los requisitos legales para ese pago, asociados al porcentaje de alumnos prioritario del colegio que dirigía la demandante.

Deberá determinarse, entonces, la procedencia de la prestación que intenta cobrar la demanda, despejándose lo pactado entre las partes, el haber recibido esa prestación en algún momento la demandada, y, en caso de no haberla percibido o haberla dejado de percibir, los fundamentos de aquello.

**SEGUNDO:** La acción de cobro de se analiza implica no solo la consideración de normas laborales tratadas en el Código del ramo, sino que de normas especiales también de carácter laboral, pero contenidas en leyes particulares, dada la naturaleza pública de la función que ejercía la actora y la institución demandada.

Existen relevantes cuestiones que no son mayormente discutidas entre las partes y que se solucionan fácilmente con la prueba que ambas partes traen a juicio, que permitirán concentrar esta sentencia en aquellos asuntos realmente discutidos. Estas son:

1. La demandante se desempeñó como Directora del Liceo Bicentenario Monseñor Enrique Alvear, de la comuna de Pudahuel, desde el 29 de febrero de 2016. Esto es así dicho en demandada y contestación y se acredita con la incorporación de la Resolución N°115 de 2015, en que se designa a la demandante en aquel cargo por 5 años y el Certificado de la Corporación Municipal de Pudahuel



de 12 de marzo de 2020, que refrenda esa fecha de ingreso y el cargo ocupado.

2. El 01 de marzo de 2018 la demandante es traspasa de la Corporación Municipal de Pudahuel a la demandada Servicio Local de Educación Pública Barrancas. Así es relatado por los escritos fundamentales de las partes y se acredita con la incorporación de la Resolución Exenta N°137 de Traspaso de trabajadores y trabajadoras al Servicio demandado, lo que se complementa con el Decreto 737 del Ministerio de Educación, que fija la instalación del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, traído también a juicio por la demandada.
3. La demandante percibió en sus liquidaciones de remuneraciones entre el mes de marzo de 2016 y el mes de febrero de 2018 una prestación que se denomina todos aquellos meses "Aisg. Resp. Directiva", que es entendida por ambas partes como Asignación responsabilidad directiva, y que equivale al 70% según se grafica en las liquidaciones de remuneraciones, porcentaje sobre la renta básica mínima nacional docente, como explican las partes. Esa asignación es por \$414.772 entre marzo de 2016 y noviembre de 2016, de \$438.130 en diciembre de 2016, de \$427.997 entre enero de 2017 y noviembre de 2017 y de \$438.684.- entre diciembre de 2017 y febrero de 2018. En marzo de 2018 las liquidaciones de remuneraciones cambian en su formato, apareciendo ahora como empleador la demandada (Servicio Local de Educación Pública Barrancas) y pagándose una "Asig. De Responsabilidad ACAP" (ambas partes están contestes en que las siglas significan Asignación Concentración Alumnos Prioritarios) y otra



"Asig. De Responsabilidad", cambiando la sigla ACAP a partir de abril de 2018 por la expresión "Alta Concentr. Alumnos". Esto implica, según explican ambas partes, contestes en el punto, que el pago desde marzo de 2018 de la "Asig. Responsabilidad Directiva" es derivada de la concentración de alumnos prioritarios, no de la asignación de responsabilidad directiva que se contiene en las bases del concurso al que postula la actora, pese a continuar llamándose de la misma forma. El incremento que sufre esa asignación implica que comienza a pagarse el 75% de la renta básica mínima nacional docente, por ser ese el pago ordenado normativamente. Implica también que la demandada asume que la concentración de alumnos prioritario deriva el pago de dos asignaciones por el 75% de la renta básica mínima nacional docente, una por desempeñarse la actora en un establecimiento que cumple los parámetros para esa asignación y otra por ser Directora de un colegio en esa posición. Dicho de otro modo, desde marzo de 2018 no hay discusión entre las partes que el pago de Asignación de Responsabilidad que se refleja en las liquidaciones de remuneraciones, no guarda relación con la asignación indicada en las Bases del Concurso para Directora que se adjudica la actora (que se referían en el considerando posterior), sino únicamente con la cantidad de alumnos prioritarios del establecimiento en que se desempeñaba, derivado del artículo 51 de la Ley 19.070.

4. La asignación asociada a las matriculas de alumnos prioritarios deja de ser pagada el año 2020, por no cumplir el establecimiento en que se desempeñaba la demandante con el porcentaje de matrículas necesarios





para ese pago (sobre el 60%), cuestión que es sostenida por ambas partes, incluida la absolución de posiciones de la demandante, y se refrenda con la incorporación de las liquidaciones de remuneraciones de ese periodo y la respuesta de Oficio del Ministerio de Educación que refiere la cantidad de alumnos prioritarios matriculados en los colegios de la región, incluido aquel en el que se desempeñaba la demandante.

5. Las partes aclaran juicio que durante la tramitación de la presente causa, la relación de trabajo terminó, específicamente en 31 de agosto de 2021.

**TERCERO:** Se trae a juicio las "Bases de Concurso Público Director/a Establecimiento Municipal Liceo Monseñor Enrique Alvear Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel", que contiene las condiciones de trabajo a las que accede las que postula y accede la demandante al ser nombrada en el cargo, según se estableció en el número 1 del considerando anterior.

La discusión en esta causa se concentra en las remuneraciones de la demandante, lo que se encuentra contenido en el capítulo VI de esas bases, según destacan las partes al incorporar el documento. Señala en esa parte las Bases, en lo pertinente: *"Nivel Referencial de las Remuneraciones. El cargo se rige por las normas del Estatuto Docente, por tanto, su remuneración se ajustará a dichas normas e incluirá la asignación de responsabilidad directiva. En caso que el Director (sic) seleccionado sea un profesional de la educación, y que por aplicación de la Renta Básica Mínima Nacional y las asignaciones que le sean aplicables, le*



*corresponda una remuneración mayor, será esta última la que se aplicará."*

De esta manera, relacionadas las liquidaciones de remuneraciones de la demandante entre los meses de marzo de 2016 y febrero de 2018, indicadas en el número 3 del considerando previo, con las beses en que se pactan las condiciones de trabajo y, en particular, las remuneratorias, la Asignación de Responsabilidad Directiva pactada se contiene explícitamente en las liquidaciones de remuneraciones referidas, o sea, fue pagada en ese periodo. El pago, además, se ajustó al 70% de renta básica mínima nacional docente. Lo anterior se complementa además con los dos certificados de la Corporación Municipal de Pudahuel, en los que se indica con claridad que ese órgano, empleador de la demandante en el primer periodo, pagó como parte de sus remuneraciones la Asignación de Responsabilidad Directiva, entre marzo de 2016 y febrero de 2018.

**CUARTO:** Como se indica en los números 3 y 4 del considerando segundo, una vez que se produce el cambio o traspaso de la demandante al Servicio demandado, comienza a aparecer en las liquidaciones de remuneraciones de la trabajadora demandante las asignaciones asociadas a la matrícula de alumnos prioritarios del artículo 51 de la Ley 19.070 (la norma indica en el inciso tercero: "Los establecimientos educacionales de alta concentración de alumnos prioritarios recibirán las siguientes asignaciones adicionales: En los establecimientos educacionales con una matrícula total de entre 400 y 799 alumnos, la asignación para su director será de un 37,5%. Si el establecimiento tuviese una matrícula total de 800 a 1.199 alumnos, dicha asignación será de un 75%, y si tuviese una matrícula total



*de 1.200 o más alumnos, será de 100%. Para estos efectos, se entenderá por establecimiento educacional de alta concentración de alumnos prioritarios, aquellos que tengan, al menos, un 60% de concentración de alumnos prioritarios de acuerdo a la ley N° 20.248, hayan o no suscrito el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa a que se refiere dicha ley.”)*

Ya se ha establecido en el considerando anterior que la demandante recibió la asignación de responsabilidad directiva pactada, a diferencia de lo sostenido por la demandada. No obstante, se hace relevante ocuparnos de los principales argumentos de la demandada para desconocer tal pago y pedir el rechazo de la demanda.

El fundamento que intenta la demandada, además de no tener correlato en los hechos, según se ha establecido a partir de la prueba, tampoco resulta razonable ni legítimo. Lo primero para descartar la tesis de la demandada, es que se pacta en las bases del concurso para el cargo al que accede la demandante una “Asignación de Responsabilidad Directiva” que, como se dijo, es explícitamente pagada en las liquidaciones de remuneraciones y ese pago se mantiene estable hasta febrero de 2018, cuando se produce el traslado o transferencia de trabajadores y trabajadoras al servicio demandado. No existe asidero en la prueba ni en cualquier otro antecedente para suponer que lo que se pagaba era algo distinto a lo pactado en el capítulo VI de las citadas bases. La demandada indica haber asumido que lo pagado no era la asignación de responsabilidad directiva, sino la otra asignación asociada a la matrícula de los alumnos prioritario, pese a que no se condecía con el nombre y monto de esa asignación. La demandada sencillamente asume que su



antecedente pagaba algo distinto a lo que explícitamente indicaban las liquidaciones de remuneraciones por todo el tiempo trabajado hasta antes de asumir la posición de empleador, a pesar de la claridad de la denominación de la asignación pagada en relación a la pactada, no hacer referencia a matrícula de alumnos prioritarios y no coincidir el monto de lo pagado con esa asignación legal, lo que incluso la lleva a subir el monto pagado, única forma de realizar la imputación, pero no a pagar lo que necesariamente se adeudaría por el periodo anterior (siguiendo una derivada de este planteamiento), cuestión que le resta aún más legitimidad a esa postura. A ojos de la demandante, le siguieron pagando la asignación de responsabilidad directiva pactada, pero por un mayor monto, enterándose que lo pagado era otra asignación solo a partir de eliminarse el pago por no cumplirse una condición relacionada con la matrícula de los alumnos prioritarios artículo 51 de Ley 19.070), lo que hace comprensible que no se reclamara antes, como explica la demanda. Esta nueva interpretación de la demandada al asumir la posición de empleadora de la demandante (marzo de 2018) no se le comunica de ninguna forma, únicamente se asume unilateralmente y se realizan modificaciones a lo que regularmente venía siendo solucionado mes a mes, manteniendo convenientemente el nombre en una de las asignaciones y comunicando el cambio solo cuando deja de pagar la asignación legal.

Lo cierto es que esta propuesta fáctica de la demandada no encuentra sustento en la prueba, como se ha analizado, y se devela como otra cosa el cambio unilateral no solo de lo pactado y lo que será pagado, sino que de lo pagado en el



pasado, cuando ese Servicio aún no era parte de la relación de trabajo con la demandante.

**QUINTO:** Se intenta como explicación completaría a lo anterior por la demandada, para justificar que nunca se habría pagado la asignación pactada en el capítulo VI de las bases, que aquello sería contrario a derecho, pues existe una norma que limita asignaciones por mérito al 30% de la renta básica mínima nacional docente. La norma que sustenta esa argumentación es el artículo 47 inciso final de la Ley 19.070, que indica que los *sostenedores podrán establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, las que se otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos del Servicio Local respectivo*. Luego, el artículo séptimo transitorio de la Ley 20.903 limitaría las asignaciones a un total del 30% de renta básica mínima nacional docente, citándose un Dictamen de Contraloría General de la Republica que avalaría tal interpretación. Pues bien, basta la sola lectura de la norma transcrita para descartar el supuesto impedimento legal, pues la asignación pactada no está vinculada de ninguna forma al mérito, sino únicamente a ocupar el cargo de Director o Directora que se concurra, sin condicionamiento a la forma en que se desarrolla esa función -merito-.

Se indica en la contestación de la demandada, como otro argumento para resistir el pago, que la asignación convencional no tendría origen el mérito, por lo que lo que contraviene citado artículo 47 del Estatuto Docente, lo que eximiría a la demandada de su pago. Al efecto deben recordarse que el pacto con la demandante lo celebrado y



ejecuta la antecesora legal de la demandada, quien, como se ha establecido, pagó lo pactado regularmente, sin que exista alguna impugnación administrativa o judicial respecto del concurso que entrega a ala demandante su cargo y el cumplimiento posterior de lo pactado en relación al empleador público, por lo que esta suerte de nulidad de lo pactado por contravenir el derecho -lo que no se prueba ni se pide explícitamente-, no resiste mayor análisis. Sabe la demandada, o no puede menos que saber, el órgano demandado, que mientras el acto administrativo que obligó al servicio no sea impugnado, debe cumplir tal, y que una reinterpretación unilateral años después no la autoriza a dejar de cumplir lo pactado que, a lo menos, goza de apariencia de legalidad, salvo impugnación o resolución que deje sin efecto ese acto, nada de lo cual es intentado.

Valga para reafirmar lo irregular de la interpretación que se pretende, el recordar que tampoco tiene sustento en los hechos, pues esa norma cuya aplicación e interpretación se discute -Ley 20.903- es posterior no solo al nombramiento de la demandante y a su ingreso al trabajo, pagándose siempre, como se ha dicho, la asignación pactada, en un necesario cumplimiento de lo contratado, por lo menos por el antecesor de la demandada.

Finalmente, la propuesta de la demandada redundará en un evidente perjuicio en las remuneraciones de la demandante, que no solo es probable, sino que se concretó cuando se deja de pagar la asignación por concentración de alumnos prioritarios el año 2019, pues en ese momento se advierte por la trabajadora que lo pagado por esta demandada no era la asignación convencional, como ya se indicó, y tiene una reducción violenta en sus remuneraciones, hasta el término



del trabajo. Esto es derechamente contrario al artículo cuadragésimo segundo transitorio de la Ley 21.040, que regula el traspaso de trabajadores y trabajadoras a los Servicios Locales de Educación, y que indica que el traspaso *no podrá significar una disminución de las remuneraciones*, señalando también que *ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos*. Esa norma está directamente dirigida por el legislador a los servicios como el demandado, que deberá asumir el traspaso de trabajadores y trabajadoras con las dificultades que eso implica, y que deberán tener especial cuidado en no perjudicar sus remuneraciones, que es justamente lo que el servicio demandado realiza, desatendiendo el mandato legal. La norma es de tal forma clara y explícita al establecer como regla la intangibilidad de las remuneraciones, que no se hace necesario dar cuenta de los principios de las relaciones laborales que la demandada vulnera, y que evidentemente subyacen en la norma citada.

La demanda será en definitiva acogida

**SEXTO:** Anunciado que se acogerá la demanda y considerando la excepción de prescripción acogida parcialmente en audiencia preparatoria, la demandada será condenada al pago de la prestación demandada por el periodo que media entre 03 de veril de 2018 y el término de la relación de trabajo el 31 de agosto de 2021, calculándose la asignación al 70% de la Renta Básica Mínima Nacional Docente, según lo expresado en las liquidaciones de remuneraciones de la demandante que se incorporan a juicio.

Visto además lo dispuesto en los artículos 1, 5, 41, 63, 420, 446 y siguientes, 452, 453, 454, 456, 459 todos del



Código del Trabajo, artículos 47 y 51 de la Ley 19.070, Ley 21.040, y demás normas legales pertinentes **SE RESUELVE:**

**I.-** Se **acoge** la demanda de cobro de prestaciones interpuesta por ANA MARÍA ULLOA MARTÍNEZ en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS;

**II.-** Se **condena** a la demandada SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA BARRANCAS a pagar a la demandante ANA MARÍA ULLOA MARTÍNEZ:

1. Asignación de responsabilidad directiva entre el 03 de abril de 2018 y el 30 de noviembre de 2018, correspondiente a \$3.480.226.-;
2. Asignación de responsabilidad directiva entre el 01 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, correspondiente a \$5.431.848.-
3. Asignación de responsabilidad directiva entre el 01 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, correspondiente a \$5.601.204.-;
4. Asignación de responsabilidad directiva entre el 01 de diciembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, correspondiente a \$2.966.226.-;

**III.-** Las prestaciones señaladas en el punto anterior deberán ser objeto de reajustes e intereses, según dispone el artículo 63 del Código del Trabajo;

**IV.-** Se **declara** que la Asignación de Responsabilidad Directiva era parte de la remuneración de la demandante a la época del término de la relación laboral;

**V.-** Cada parte soportará sus costas.

**VI.-** Una vez firme y ejecutoriada la presente sentencia, remítanse los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y





Previsional para su ejecución en los tiempos y formas indicados en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

**RIT** O-1152-2021

**RUC** 21-4-0322046-6

**Dirigió la audiencia y dictó sentencia VICTOR MANUEL RIFFO ORELLANA, Juez Titular del 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**



A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>